

Los partidos derrotan a la institucionalidad en las elecciones*

La modestia de los resultados electorales con toda seguridad ha desconcertado a todos los partidos políticos, aunque todos ellos intentan disimularlo con explicaciones parciales y presentan sólo las ventajas que obtuvieron. Este esfuerzo es mayor en ARENA y el FMLN. Cada uno se declara la primera fuerza política nacional y ambos afirman que el gran perdedor es el otro. ARENA interpreta su “triumfo” como un voto de confianza para el presidente Saca y como autorización para concertar. El FMLN interpreta su “triumfo” como gesta heroica, dadas las desventajas que le impuso la competencia. ARENA exhibe como evidencia el aumento del número de diputados y alcaldías, así como el aumento de votos en San Salvador. El FMLN muestra como evidencia la recuperación del poder del veto legislativo y la cantidad de votos captada, así como haber retenido la capital y el área metropolitana.

Ninguno de los dos tiene fundamento para proclamarse ganador absoluto de las elecciones y, por lo tanto, tampoco puede calificar a su adversario como perdedor absoluto. Los datos no dan pie para afirmaciones tan tajantes, las cuales obedecen al alto grado de polarización de ambos partidos. No obstante, ARENA y, en concreto, el presidente Saca perdieron más que su adversario. Aun cuando no hay un ganador claro de las elecciones legislativas y municipales del 12 de marzo de 2006, sí hay un perdedor absoluto: la institucionalidad. Esta, en lugar de salir fortalecida por esta práctica democrática, quedó más debilitada aún. No es aventurado afirmar incluso que fue derrotada por los partidos, sobre todo por ARENA y el FMLN, y también por el presidente Saca. Al igual que otras instituciones, la institucionalidad electoral actual es obsoleta y clama por una reforma radical.

1. Sin fundamento para el triunfalismo

Después de invertir energía y recursos enormes, y de someter a la población a un intenso bombardeo propagandístico, ninguno de los dos partidos grandes consiguió lo que se propuso. Esto no significa que las pérdidas hayan sido considerables, pero las ganancias son insatisfactorias, e incluso desconcertantes. La diferencia de votos en la elección legislativa,

* Editorial, pp. 143-159.

entre el FMLN y ARENA, es muy pequeña —poco más de 1,600 votos a favor de aquél. Pero mucho mayor, y favorable a ARENA —casi 121 mil votos—, en la de gobiernos locales, lo cual indica un voto diferenciado. Según el número de votos recibido, ninguno de los dos partidos grandes tiene fundamento empírico para declararse como primera fuerza política.

ARENA consiguió dos diputados más que el FMLN —34 en total, o sea, siete más que los del año 2003. En cambio, el FMLN sólo obtuvo uno más de los obtenidos entonces. Ahora bien, al considerar la cantidad de diputados que retuvo a lo largo de esta legislatura, su crecimiento es mayor que el de ARENA. Por otro lado, así como el FMLN capta diputados en las elecciones, así los pierde, a lo largo de las legislaturas. Desde 1994, en cada elección —1997, 2000 y 2003—, la cantidad de escaños obtenida por el FMLN ha sido mayor que aquella con la cual terminó y en todas ellas aumentó tanto el número de diputados como de votos. La decisión del cuerpo electoral de tener un FMLN fuerte en la Asamblea Legislativa es incuestionable, pero éste, hasta ahora, no ha estado a la altura y, paradójicamente, en vez de acumular fuerza, pierde diputados, que lo abandonan, en medio de intensas luchas por el poder del partido, las cuales terminan en divisiones, escisiones y expulsiones. Al final, el FMLN queda convertido en una oposición más simbólica que eficaz. Excepto el Partido Demócrata Cristiano, que obtuvo seis diputados (dos más), los otros dos partidos —Conciliación Nacional y Centro Democrático— perdieron, el primero seis, lo cual lo reduce a diez, y el segundo se queda con dos.

ARENA tiene, pues, más diputados que el FMLN, pero no tiene mayoría simple. Para alcanzarla, dependerá de los diez votos del Partido de Conciliación Nacional. El FMLN tampoco la tiene y para conseguirla debe contar con los diez votos de Conciliación Nacional más los dos del Centro Democrático o los de la Democracia Cristiana. La mayoría simple es más difícil para el FMLN que para ARENA. O sea, ninguno de los dos, por sí mismo, puede sacar adelante su agenda legislativa. En consecuencia, tampoco tienen la mayoría calificada para la aprobación de los préstamos —y del presupuesto, cuando hay que endeudarse para cubrir el crónico déficit de funcionamiento del gobierno— y para las elecciones de segundo grado —Fiscal General, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General y Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Es más, esa mayoría sólo es posible si los dos se ponen de acuerdo. En este nivel, el FMLN tiene una ventaja relativa, pues sus votos son imprescindibles, lo cual no sucede en la legislatura saliente. El crecimiento de ARENA ha despojado a la alianza Centro Democrático y Frente Democrático Revolucionario del protagonismo actual, la cual fue sacrificada en aras de la polarización, con lo cual ARENA perdió un interlocutor más abierto que el FMLN. Un partido con mayor visión política que ARENA se hubiera esforzado por abrir espacio a estos dos partidos pequeños. Por eso, ARENA habla de haber recibido un mandato para concertar, pero agrega de inmediato que el FMLN se niega rotundamente a ello. En cambio, este alega estar dispuesto, pero a cambio de ciertas condiciones que, de antemano, son inaceptables para ARENA. Estas actitudes son un mal augurio para el entendimiento y la concertación. Sin ellos, el estancamiento legislativo y, por lo tanto, más polarización y más desgaste serán las características de los próximos tres años.

Aunque el FMLN retuvo la mayoría de las alcaldías del gran San Salvador, la de la capital la ganó por apenas 44 votos. Este último resultado es incomprensible, dado su predominio de la zona metropolitana, donde incluso perdió una alcaldía, pero le arrebató dos a ARENA, donde, además, la mayoría de la población se identifica más con la izquierda que con el centro izquierda y la derecha, y que hasta ahora había sido su bastión indiscutido. Tanto que, al comienzo de la campaña, la alcaldía de San Salvador no fue una prioridad para la estrategia de ARENA, sino hubiera seleccionado un candidato más calificado. La señal de alarma ya estaba dada, en la elección presidencial de 2004, cuando el FMLN disminuyó su caudal en San Salvador, aunque creció en el nivel nacional. La disputa por la alcaldía capitalina, la más apreciada de todas, ilustra el curso de la disputa por el poder entre ARENA y el FMLN. Aun cuando el primero sobrepasó al segundo en más de 120 mil votos, con los cuales aquél obtuvo más alcaldías que éste (147 de 262, 36 más que en 2003), el FMLN gobernará mucha más población que ARENA, incluyendo el área metropolitana, la zona más importante del país, desde todo punto de vista. Fuera de ella, el FMLN experimentó un retroceso significativo, más profundo en las municipalidades del occidente y del norte del país —ganó 59, cinco de ellas en coalición, mientras que en 2003, 62 solo y doce en coalición. Entre las quince alcaldías perdidas se encuentran cabeceras departamentales como Chalatenango y Zacatecoluca. El Partido de Conciliación Nacional perdió 14 de 53; mientras que el Partido Demócrata Cristiano mantuvo la misma cantidad (14, más cuatro en coalición). Cambio Democrático perdió una y se quedó con tres.

La abstención, cerca del 47 por ciento, según el padrón, es demasiado alta para el derroche de recursos y energías y también para las expectativas de ARENA y del FMLN, que hasta el último momento hablaron de votación masiva, de gran entusiasmo y mucho interés. Aun cuando el universo del padrón debe ser tomado con cautela, pues no sólo incluye a los fallecidos, sino también a la población residente fuera del país con Documento Único de Identidad que, dado el efecto migratorio, no es nada despreciable, la votación se quedó lejos de la cota alcanzada en la presidencial de 2004, el parámetro de ARENA y del FMLN. Si a esto se añade que buena parte del electorado decidió su voto antes del comienzo de la campaña, es probable que con mucho menos recursos, los partidos con mayores expectativas hubieran obtenido el mismo resultado o tal vez incluso hubieran conseguido más.

2. El proceso electoral debilita la institucionalidad

El discurso postelectoral de los partidos políticos grandes no sólo es ajeno a la realidad, sino que, además, la encubre. No sólo carece de fundamento empírico, sino que también pasa por alto el hecho más importante del proceso. En efecto, el proceso electoral debilitó aún más la institucionalidad. Desde la primera elección de postguerra de 1994, no había habido una con tantas irregularidades e ilegalidades. Fueron tantas que no pueden ser consideradas como hechos aislados, sino como una ruptura de la institucionalidad.

Por primera vez, los centros de votación abrieron, por lo general, con una hora de retraso por dificultades logísticas de toda clase, la tinta de seguridad no cumplió su función e incluso lesionó a los usuarios, el padrón electoral no era confiable, el sistema informático del escrutinio no funcionó, la burocracia electoral fue ineficaz, los electores tuvieron dificultades con el padrón, los centros de votación no fueron señalizados con claridad, su personal carecía de la capacitación adecuada, etc. Tanto ARENA como el FMLN, y el Partido de Conciliación Nacional, en menor medida, comenzaron la campaña antes de lo establecido por la ley, el presidente Saca participó activamente en ella, en abierta violación a la Constitución, que se lo prohíbe, los partidos hicieron propaganda en los centros de votación, indujeron al voto, compraron votos, permitieron votar a habitantes de poblados del otro lado de la frontera salvadoreña, desplazaron población de municipios vecinos —una vez decidido a ganar San Salvador, ARENA habría desplazado militantes de dos municipios vecinos, los cuales habría perdido a favor del FMLN—, confundieron los documentos de identidad, aparecieron documentos de identidad falsos, ejercieron violencia sobre la ciudadanía y alteraron las actas del escrutinio —como parece haberlo hecho el FMLN en San José Villanueva y tal vez ARENA, en Cabañas. Dada la ausencia de controles eficaces no es fácil comprobar estos señalamientos, ni estimar su impacto en los resultados de las elecciones locales.

Ningún funcionario electoral ejerció su autoridad para impedir estas violaciones o sancionar a los responsables. Ni siquiera intentaron ejercerla porque, en la práctica, carecían de ella. Más aún, con descaro pasmoso las atribuyeron a la pasión política o al desbordamiento de los ánimos. No podía ser de otra manera, ya que todos los funcionarios electorales desempeñaron al mismo tiempo el rol incompatible de representar al partido político que los designó para el cargo. Así, cuando el violador pertenecía a éste, el funcionario desconoció el hecho; cuando pertenecía al adversario, entonces, la reacción airada no se hizo esperar. Pero las protestas fueron interpretadas como parte del folclore electoral. El desempeño de roles contradictorios incluyó desde el Presidente de la República, quien funge como presidente de ARENA, hasta los funcionarios electorales de los municipios más remotos del país. A todos ellos les parece una obviedad asumir una función pública para defender intereses partidarios.

Las irregularidades e ilegalidades del 12 de marzo fueron precedidas por una larga campaña extremadamente violenta. Hasta cierto punto, dado el contexto social violento, es “normal” que también la campaña haya sido violenta. Los primeros actos de violencia política asomaron aun antes de que la campaña comenzara de forma oficial. Los partidos no respetaron la propaganda, sino que la destruyeron, irrespetaron los sitios públicos e incluso los privados, candidatos y dirigentes se insultaron y se provocaron, lo cual desembocó en agresiones físicas contra las dependencias y los militantes de los adversarios, que dejaron lesionados con palos, piedras y armas de fuego e incluso algunos muertos. El Tribunal Supremo Electoral contribuyó a la violencia política por omisión y por comisión, al decidir, no según la ley, sino con afán de favorecer o perjudicar a un determinado partido. Invariablemente, todas las dirigencias se declararon inocentes de los actos violentos o aseguraron que investigarían o afirmaron que no

habían ordenado a sus militantes agredir al contrario; todas ellas se pronunciaron a favor de una campaña pacífica y civilizada; todas ellas se proclamaron respetuosas de la ley; algunas de ellas incluso firmaron pactos de no-agresión y todas ellas se exhortaron entre sí e incluso emitieron un singular como ineficaz decreto legislativo para instarse mutuamente a conducirse de forma democrática. Los repetidos y crecientes actos de violencia política, a lo largo de todo el proceso, ponen en evidencia la falsedad de estas posturas.

La policía y la Fiscalía General, al igual que el Tribunal Supremo Electoral, desconocieron estos actos violentos, no obstante ser hechos públicos. En la práctica, no hay autoridad salvadoreña con poder para instruir una causa judicial contra un político, y si por acaso alguna se atreviera y el juez llegara a sancionarlo, las instancias superiores anularían la sentencia condenatoria. Esto significa que, en la práctica, los partidos, al igual que los funcionarios, están por encima de la ley, una ley que ellos mismos decretan y que todos defienden con aparente convicción. Hasta ellos se sorprendieron del aumento de la violencia política, pues, en una reacción cultural muy típica, propusieron aumentar los años de prisión para sus responsables, como si esta disposición extrema fuera a detenerlos. Los partidos no pueden participar en una campaña electoral observando la legislación. Los deseos irrefrenables de triunfo aplastante o el deseo de revancha política o de ajustar cuentas hacen de la violencia el instrumento idóneo para captar votos. Pareciera que los políticos se sienten más cómodos con los medios violentos que con los democráticos. Esta perversión de la política electoral debe mucho a que tanto los partidos como el gobierno viven para la siguiente elección. Así, el país, con intervalos breves, se mantiene en elección permanente.

Los políticos y la gran prensa se refieren a este proceso como una fiesta cívica, lo cual, dadas las circunstancias anteriores, es irónico y no deja de ser cínico. La violencia y la impunidad hacen que las elecciones no sean fiesta, o en cualquier caso, se trata de una fiesta violenta, lo cual es una contradicción, ni tampoco puedan ser interpretadas como expresión de civilidad. La tendencia al tremendismo de la prensa nacional contribuyó a desquiciar el proceso electoral, en lugar de trabajar para introducir sensatez. No sólo concedió espacios desproporcionados a los candidatos, sino que adornó sus intervenciones con tonos apocalípticos. Según el enfoque periodístico, el futuro del país dependía de esta elección; en la práctica, los electos tendrán poco margen para maniobrar, por limitación financiera, por ignorancia o incapacidad insuperables, o porque ocuparán un cargo con compromisos ya adquiridos, pero no confesados. Los compromisos adquiridos, pero sobre todo la falta de formación y experiencia hicieron temerario un debate público. Los diputados deben seguir las órdenes de sus respectivas dirigencias. Los alcaldes, aunque gozan de mayor libertad, no tienen tanta como dan a entender. Pero los candidatos, en sus intervenciones ante la prensa, hicieron caso omiso de estas condicionantes y los periodistas lo toleraron e incluso lo promovieron. A la mayoría le falta coraje o independencia y también formación para cuestionar el discurso político. Aquellos periodistas y empresas mediáticas con opciones partidarias definidas no tuvieron vergüenza en mostrarlas abiertamente. En general, unos y otras

fueron complacientes con los representantes del partido de su preferencia y críticos hasta la impertinencia con sus adversarios. Fue una oportunidad desperdiciada, porque la prensa pudo contribuir a elevar el nivel del discurso, a comprometer a los candidatos y a formar e informar a la ciudadanía.

El proceso electoral dejó un país más polarizado y menos tolerante; más en poder de cacicazgos nacionales y regionales que de gobernantes modernos, y menos respetuoso de la institucionalidad democrática; más sitiado por unos partidos enardecidos y violentos, que en manos de instituciones sólidas que velen por el interés general.

El atentado contra la institucionalidad continuó después de cerradas las urnas. Ante un virtual empate en la alcaldía de San Salvador, tanto el FMLN como ARENA optaron por recurrir a medios no institucionales para dirimir la cuestión. El FMLN optó por la plaza pública y la presión de su militancia. ARENA, en cambio, eligió la vía informal del ejercicio del poder. A estas alturas, ARENA y su gobierno perdieron el control del proceso. Las suspicacias se encargaron de crear el desconcierto en las filas de los dos partidos. Sus reacciones, la de ARENA, que ratificó por su cuenta el triunfo de su candidato aun sin datos que fundamentaran su proclamación, y la del FMLN, que lanzó a la calle a sus militantes

para reclamar aquello que consideraba legítimamente suyo, constituyen la mejor demostración de la poca confiabilidad del Tribunal Supremo Electoral. La elección de San Salvador es paradigmática de las ilegalidades del proceso y es también culminación de una serie de decisiones equivocadas de ARENA y de Casa Presidencial.

El temor a las posibles maniobras de ARENA estaba justificado, pero el FMLN no debe olvidar que sus representantes en el Tribunal, de común acuerdo con los de ARENA y con la misma clase de artimaña, se negaron a inscribir al Partido Frente Democrático Revolucionario, cuya existencia percibieron como competencia. El FMLN temió que le arrebatará votos, como en efecto ocurrió, en San Salvador. ARENA, porque podría contribuir a romper la dinámica polarizante. Cuando el Tribunal perdió el control, el FMLN, en lugar de acudir a las instancias institucionales, en las cuales tiene representación, lanzó a su militancia a la calle, donde la defensa del voto desembocó en violencia. Un análisis más frío hubiera considerado que, con los observadores extranjeros y sobre todo de la Organización de Estados Americanos y con la prensa internacional y nacional pendientes del escrutinio, era muy difícil que su contraparte se saliera con la suya. Aunque es dudoso que la presión ejercida por la movilización callejera haya influido en el reconocimiento del triunfo del FMLN, por parte de ARENA, es evidente que el desorden y la violencia provocados fueron explotados con gran facilidad por el presidente Saca y su partido, los cuales al mismo tiempo que desviaron la atención del origen de la incertidumbre, revirtieron en contra de aquél las acusaciones lanzadas contra ellos. Gracias a esta hábil estratagema, a los ojos de la opinión pública, el FMLN sería el partido que habría enturbiado el final de un proceso electoral ejemplar y no el presidente Saca y ARENA, al intentar imponer su voluntad con medios violentos y el autoritarios.

El Tribunal Supremo Electoral se limitó a cumplir con las formalidades indispensables para mantener las apariencias de un proceso limpio y transparente, pero su incapacidad y desinterés para garantizar las condiciones fundamentales de la competencia son incuestionables. Por su lado, los partidos políticos, incluido el presidente Saca, demostraron su determinación de llegar hasta donde fuera necesario con tal de ganar un puñado de votos adicionales. Tanto ARENA como el FMLN plantearon la elección del 12 de marzo como una encrucijada, pero aquél fue bastante más lejos que éste al plantearla como plebiscito sobre la gestión presidencial. El propósito de este planteamiento era cerrar el espacio a la competencia de los otros partidos para que el escenario político quedara libre de estos incómodos actores secundarios. Así, era más fácil proyectar la competencia entre los dos protagonistas como una confrontación final. Una simpleza, porque el sistema de elección proporcional y por residuos no lo permite.

Aun cuando ARENA y el FMLN se proclamaron vencedores absolutos, en realidad, hoy son más débiles que antes. Paradójicamente, ARENA dependerá más que antes del liderazgo de un presidente Saca debilitado. La correlación de fuerzas legislativas lo obliga a gobernar el resto de su mandato en estrecha vinculación con otros partidos y actores externos, como el presidente estadounidense y tal vez sus colegas centroamericanos. El FMLN, por su lado, posee el poder del voto cualificado, pero sólo podrá ejercerlo en contadas ocasiones y, hasta ahora, lo pierde a lo largo de los tres años de legislatura, por falta de liderazgo y de visión política, y por el alejamiento creciente de la población. Estas debilidades fuerzan a los dos partidos grandes a ocuparse más de su supervivencia y de acumular fuerzas para las elecciones de 2009 que de resolver los problemas nacionales.

El proceso electoral dejó un país más polarizado y menos tolerante; más en poder de cacicazgos nacionales y regionales que de gobernantes modernos, y menos respetuoso de la institucionalidad democrática; más sitiado por unos partidos enardecidos y violentos, que en manos de instituciones sólidas que velen por el interés general. Las elecciones de marzo dejaron entrever un Estado fracasado como el haitiano y no como el chileno, el modelo ideal de la derecha salvadoreña, hasta hace poco. Por consiguiente, es irresponsable desconocer la debilidad institucional y continuar con la ficción democrática. El fracaso institucional es el caldo de cultivo para la proliferación de oportunistas y de quienes medran del chantaje, de la amenaza y del espectáculo. Estos no se encuentran, necesariamente, fuera del sistema o de los partidos políticos, sino que han sido invitados por estos últimos, en un intento desesperado por ganar terreno a cualquier precio.

3. La crisis del liderazgo en ARENA: la marca “Tony”

ARENA se propuso quedarse con la mayoría legislativa para, según expresión del presidente Saca, poder gobernar sin obstáculos. A partir de su elevada popularidad y de su efecto arrollador, en la elección presidencial de 2004, ARENA diseñó su estrategia alrededor de la figura del presidente Saca. El partido no pidió el voto para sus candidatos, sino para el presidente y éste incluso lo pidió para sí mismo, con lo cual hizo de las

elecciones legislativas y municipales un plebiscito. ARENA no sólo fracasó, sino que, además, desgastó el capital político del presidente Saca, cuya presidencia, sin gestos dramáticos, está agotada. La torpe estrategia de ARENA convirtió el empate virtual de la alcaldía de San Salvador en una derrota política del presidente Saca.

Este, acompañado por algunos de los altos funcionarios de su gobierno, se puso a la cabeza de los activistas de ARENA. Al igual que en la campaña anterior, el primer tema explotado fue la vertiente comunista y revolucionaria del FMLN, representada por Schafik Handal. Pero su repentina muerte dejó a la campaña de ARENA sin contenido. Entonces, sus estrategias explotaron el potencial de la seguridad ciudadana para movilizar a las masas sin costo político. A partir de ese momento, los dirigentes de ARENA enfatizaron la vinculación del FMLN con las pandillas, aunque sin mostrar prueba alguna. Las autoridades de seguridad, también activistas del partido, previnieron a la población de inminentes y violentas movilizaciones desestabilizadoras. ARENA incluso utilizó la imagen de los pandilleros para pedir el voto. Estos señalamientos infundados fueron asociados con acusaciones dirigidas contra el FMLN por oponerse al sistema democrático, provocar desórdenes y crear inestabilidad. Paradójicamente, las protestas callejeras del FMLN fueron un insumo muy valioso para la propaganda electoral gubernamental.

A raíz de la muerte del dirigente histórico del FMLN se volvió común hablar del efecto Schafik en la votación, el cual es innegable. Pero ante él se alza el efecto Saca, pues su intervención directa en la campaña de ARENA, con el pretexto de presidir el partido, también influyó. La participación de los funcionarios públicos en actividades partidarias es tradicional en la cultura política salvadoreña, pero nunca había sido tan voluminosa y abierta, ni tan determinante para el voto de ARENA como la del presidente Saca. El partido calculó que la figura del presidente era lo suficientemente fuerte como para convencer a la ciudadanía, pero pasó por alto la robustez de su imagen. Sin duda, el presidente Saca es el político de la actualidad más popular y carismático, pero su imagen es proyectada a partir de propaganda más que de realidades. Las encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) mostraron que así como estaba bien evaluado, también había señalamientos incuestionables de que el país no va por buen camino, que la economía y la seguridad, fundamentales para la población, han empeorado durante su mandato. Aparte que, en el último año, la popularidad de Saca empezó a disminuir. Así, ARENA planteó la elección como referéndum sobre la gestión presidencial, convencido de que la elevada popularidad de la figura de Saca lo llevaría a un triunfo total. Pero tres realidades, minusvaloradas por ARENA, dieron al traste con esta arriesgada apuesta: el gran tema de la delincuencia ya no tiene el impacto de antes y, por consiguiente, tampoco la popularidad; la dinámica local, determinante en estas elecciones, fue anulada por la presencia absorbente del presidente Saca, y la ciudadanía confirmó su preferencia por una legislatura que contrapesase el inmenso poder del poder ejecutivo.

La delincuencia ha sido el tema que más popularidad ha generado para ARENA, en los años recién pasados, y aunque todavía despierta simpatías y atrae votos, hay señales de agotamiento. La gente no sólo favorece las

medidas autoritarias y represivas, una herencia de las dictaduras de antaño, sino que también hace uso de ellas con frecuencia. En esta misma línea, la mayoría prefiere el régimen autoritario o se muestra indiferente al democrático. Por eso, se siente a gusto con la política de seguridad del gobierno de Saca. Pero, por otro lado, observa cómo la incidencia del crimen sigue en aumento y piensa que ARENA no va a reducirla, aun cuando tuviera control de la legislatura. Otra fuente que alimenta la popularidad del presidente Saca es su imagen de cercanía y preocupación por las necesidades de la gente. Sin embargo, el descontento con la situación socioeconómica es casi universal, así como también el deseo de cambiar el rumbo del país. Las promesas del candidato Saca de combatir la pobreza, crear empleo y apoyar a las madres solas no han sido cumplidas, lo cual puso de manifiesto la falsedad de la consigna de campaña que declaraba que este presidente sí cumplía. Su posición no mejoró con la renovación de las promesas de empleo, prosperidad, salud, vivienda y educación, metas que no puede cumplir, por falta de recursos. No sin cierto cinismo, el presidente Saca pidió una oportunidad para ARENA que, a través de la privatización, la dolarización y el tratado de libre comercio con Estados Unidos, crearía bienestar general. Estas promesas tuvieron poco eco en una opinión pública que identifica a ARENA como el partido de los ricos, de quienes, además, no tiene un juicio positivo.

La imagen del presidente invadió de tal manera la campaña que los candidatos a diputados y sobre todo a alcaldes desaparecieron del panorama electoral. La estrategia de ARENA no les dio espacio, pues sólo contó el presidente Saca. A él le debían lo que eran y lo que podrían llegar a hacer, cuando fueran electos. Sin pretenderlo, ARENA dijo una gran verdad sobre el papel de sus diputados y alcaldes. Los primeros son electos para cumplir las órdenes del presidente de turno, mientras que los otros dependen de él para promover el desarrollo de sus municipios. Esta vez, la estrategia de Casa Presidencial fue demasiado lejos, al hacer a un lado el carácter local de la elección. Estaba tan convencida de su triunfo que ni siquiera se preocupó por guardar las formas. En una elección presidencial es posible concentrar y simplificar las imágenes, las ansiedades y las aspiraciones de la ciudadanía en una sola figura; pero la naturaleza local de la elección recién pasada, donde participan muchas y variadas figuras, intereses y dinámicas, hace que el cuerpo electoral piense más en su localidad y sus problemas más inmediatos que en el país. De hecho, los resultados muestran un voto diferenciado.

Por último, ARENA desestimó la inclinación de la ciudadanía de no otorgar el control de la Asamblea Legislativa al presidente, ni tampoco a los partidos grandes. Mientras Saca y ARENA buscaron el poder total, la ciudadanía se inclinó por un régimen más democrático. Así, pues, el efecto Saca arrastra, pero no tanto como para decidir unas elecciones regionales y locales. El indiscutible capital político del presidente Saca, derivado de su popularidad, se diluyó al entrar en contacto con las dinámicas políticas locales.

La otra cara del efecto Saca es el efecto Schafik. Su fallecimiento no sólo imprimió mayor determinación al voto tradicional del FMLN, sino que

también movilizó al elector aprehensivo de izquierda, que decidió votar por él, ante la perspectiva de que el partido abandonaría el extremismo y optaría por la moderación. La participación de estos sectores y el descenso de la votación de ARENA, en parte por la deserción de la juventud —un 25 por ciento de la que votó por él en la elección presidencial—, aproximaron la cantidad de votos recibida por los dos partidos. Paradójicamente, en vida de Schafik, ARENA y su presidente exigieron con insistencia la moderación del FMLN; pero no porque estuvieran interesados en la estabilidad, sino porque, de esta manera, podían exhibir al FMLN y, en particular, a su líder histórico, como extremistas, intolerantes e intransigentes y, en contraposición a lo cual, el presidente Saca se presentaba como abierto, tolerante y paciente. El primero habría representado la amenaza del comunismo y habría sido obstáculo insalvable para el cumplimiento de las promesas de desarrollo y bienestar de ARENA, mientras que el segundo sería el paladín de la libertad y la democracia y la promesa cumplida del bienestar.

La desaparición de Schafik de la escena política dejó a ARENA sin su referente fundamental. ARENA y su presidente eran la cara luminosa de la oscuridad del FMLN y Schafik. El FMLN de Schafik era el espejo de ARENA y sus dos últimos gobiernos. La muerte de aquél vació de contenido el discurso de ARENA y de Saca, que representarían la alternativa. Así, pues, para ARENA y su presidente, el efecto Schafik fue devastador. Perdieron la figura que generaba rechazo masivo y, simultáneamente, la alternativa que ellos representaban se disolvió. Los insistentes llamados de ARENA y Saca a votar contra el FMLN, en esta ocasión, no impactaron. El fantasma de la amenaza del comunismo no cumplió su papel, las circunstancias no fueron las mismas, ni el tipo de elección era adecuado para repetir el ardid.

En el FMLN, el efecto Schafik tuvo consecuencias inesperadas. Su fallecimiento puso en evidencia que las posturas extremistas no atraen votantes. El FMLN no debe perder de vista que el país, excepto la zona metropolitana, es más de derecha que de izquierda, y más centro derecha que derecha. La zona metropolitana, en cambio, es más izquierda que derecha, pero más centro izquierda que izquierda. Asimismo, está comprobado que la gente que más vota por ARENA es la de menores ingresos, temerosa de que un cambio drástico empeore aún más su precaria situación. Por eso, prefiere la estabilidad de lo conocido a los riesgos de lo desconocido. Uno de los sectores que más vota por ARENA es el de las mujeres pobres, por lo tanto, con poca educación, y dedicadas, además, a los oficios domésticos. En cambio, el voto de las mujeres que trabajan fuera del hogar es similar al de los hombres. El efecto Saca no da más de sí, precisamente, por representar el partido de los ricos, es decir, por despreocuparse de cómo vive la mayoría de la gente, cuando ésta, precisamente, desea cambios, sobre todo en lo económico y social. Ahora bien, así como ARENA es identificado con el gran capital, el FMLN no es identificado con la misma determinación como el partido de los pobres. Por lo tanto, para avanzar en el terreno electoral, el FMLN debe afrontar el desafío de convencer a la población de ser el partido que representa sus demandas y aspiraciones, lo cual pasa por la moderación del extremismo. Este sólo satisface a su voto duro, el cual tampoco da más de sí.

La intervención directa del presidente Saca en la campaña electoral violentó la Constitución, que prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades partidarias o valerse de su cargo para promoverlas. La violación de esta norma por el Presidente de la República quien, además, es Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, una institución apolítica, es más grave aún que la de cualquier otro funcionario de menor rango. La violación no pasó sin contestación. Pero ninguna de las respuestas del presidente es satisfactoria. En cuanto ciudadano, el Presidente de la República goza de sus derechos ciudadanos, pero el cargo le inhibe del ejercicio de algunos de ellos y la prudencia política lo aconseja. La cuestión no es si el presidente de ARENA, cargo que también detenta simultáneamente, puede participar en actividades partidarias, sino si el Presidente de la República puede ser presidente de ARENA sin violentar la prohibición constitucional. Alegar que estas actividades tenían lugar después de las horas de despacho es una falacia, porque la Presidencia de la República es un cargo de veinticuatro horas y porque se valió de él para promover la actividad partidaria. Prometió infraestructura en cuanto Presidente de la República y no en cuanto presidente de ARENA y también amenazó con el poder presidencial y no con el del partido. Su discurso fue tan demagógico e incluso violento como el de cualquier dirigente de ARENA, pero sin dejar de fungir como Presidente de la República. Defendió los intereses de ARENA como cualquier dirigente entregado a su causa, pero usó el poder del Presidente de la República para intentar imponerlos. Por último, el presidente Saca optó por la inmoralidad, al defender que el fin justifica los medios. Presentó la búsqueda del poder total en la Asamblea Legislativa para anular a la oposición como bien absoluto, que justificaba cualquier medio, incluidas la irregularidad y la ilegalidad. Ni siquiera el uso de la violencia física está excluido.

La naturaleza empresarial de los altos dirigentes de ARENA se volvió a imponer. Estos grandes empresarios tienden a considerar el partido como una más de sus empresas, cuyo producto debe ser promovido y vendido como una mercancía. Por consiguiente, dotaron a ARENA de una marca. Los otros partidos también practican la mercadotecnia, pero hasta ahora ninguno había creado una marca como hizo ARENA con la marca Tony (ver en esta misma edición, "La imagen del líder de ARENA y la prensa escrita"). La identificación entre ARENA y Tony es total. Aun después de las elecciones, el Presidente de la República, en cuanto tal, tiene poco espacio, pues la marca Tony invade el espacio disponible. La marca surgió del voto masivo a favor de ARENA en las elecciones presidenciales y de la popularidad del mandatario, pero en su interior esconde la decadencia del liderazgo de este partido. El fundador de ARENA goza de liderazgo indiscutido, pero limitado, pues está confinado a presidir sus actividades desde los carteles que adornan el fondo de los escenarios. Su vinculación con los escuadrones de la muerte, el asesinato de Mons. Romero e innumerables violaciones de los derechos humanos no son asociaciones adecuadas para una marca. Su liderazgo caducó con el final de la guerra. Aunque aún quedan vestigios de su discurso, es más por incapacidad para reemplazarlo que por convicción ideológica. Luego vino el llamado presidente de la paz, el primero de la serie de la postguerra. Este sacó adelante a ARENA, en las urnas, en el

gobierno y en la popularidad. El título de presidente de la paz lo envolvió en un aura en la cual se escudó para emplearse a fondo en las primeras reformas neoliberales. Ni siquiera el escándalo de corrupción, a raíz de la privatización de la banca, hizo mella en su prestigio. Pero su liderazgo caducó con su mandato presidencial.

Le siguieron dos presidentes que, aun cuando ganaron elecciones, no estuvieron a su altura, ni tampoco pudieron mantener el nivel de popularidad deseado para concurrir con certidumbre a las urnas. Los propietarios del sistema financiero intentaron llenar este vacío y exploraron la política partidaria, sólo para experimentar un estruendoso fracaso, del cual quedaron curados. Su liderazgo fue demasiado para la tolerancia del país. Colocar al frente de ARENA, de por sí conocido como el partido de los millonarios, a algunos de ellos, resultó demasiado. Su respetabilidad y honorabilidad no gozan de mucha aceptación en la opinión pública, y sus inmensas fortunas y el ámbito del gran capital en el cual se mueven son barreras infranqueables que los separan de la gente. Entonces, colocaron a un político que prometía despertar simpatías y popularidad, pero fue el peor de todos los mandatarios de ARENA. Su liderazgo y su gobierno fueron un fiasco.

En este contexto emergió la marca actual. El candidato Saca fue lanzado como un aspirante limpio, sin relación con el cuestionable pasado político de ARENA. Se presentó como empresario exitoso, salido de la nada con voluntarismo y sacrificio. Era el líder nato, que pedía una oportunidad. A quienes accedieran, les prometió la realización de sus sueños. La candidatura emergió envuelta en el aura del salvadoreño común e incluso de abajo que, con mucho esfuerzo, había llegado a la cumbre de la empresa privada. ARENA se vendió como el medio para proporcionar a "Tony" los instrumentos, el poder económico y las conexiones para sacar el país adelante. Llegado a este punto, "Tony" se convirtió en la marca de ARENA. El resto lo hizo la publicidad. Fue tal el éxito del lanzamiento de la marca "Tony" que el gobierno de ARENA gira alrededor de ella, de tal forma que la vicepresidenta y los ministros, al igual que los candidatos a diputados y alcaldes, han sido opacados por ella. La estrategia electoral de ARENA giró alrededor del potencial de la marca, que parecía inagotable. Pero los resultados no satisficieron las elevadas expectativas del partido. Irónicamente, es muy probable que el mismo "Tony" haya provocado el efecto contrario, la abstención o el voto por otro partido. La marca es limitada y tiene fecha de caducidad. En breve, ARENA tendrá que comenzar a buscar la materia prima para elaborar otra.

La estrategia gubernamental de ARENA también ha girado alrededor de la marca Tony. Su peso es tal que incluso pareciera haber anulado la personalidad del propio Saca. Pero esta estrategia tampoco tiene futuro, puesto que el mandatario salió debilitado de la contienda, con menos credibilidad y menos autoridad. A no ser que haga gestos dramáticos, a su gobierno le queda poco por hacer, en los tres años de mandato que le quedan. Sin una novedad que contrarreste el desgaste de su participación en la campaña electoral, la presidencia de Saca ya dio de sí todo lo que podía dar. Los próximos tres años serán aún más tortuosos que los dos primeros. No serán años de concertación. Aun antes de declarar en firme

los resultados del escrutinio, el FMLN comenzó a prepararse para la próxima ofensiva electoral, la cual tendrá lugar, por jugarreta del calendario electoral, veinte años después de su mayor ofensiva militar contra ARENA y su ejército. Sabedor de lo que le aguarda, el presidente Saca no esperó la primera confrontación y llamó, en vano, a concertar y negociar. Envalentonado con su popularidad, desperdició la oportunidad para establecer consensos básicos, al comienzo de su mandato. Prescindió de la oposición, mientras se daba un compás de espera, hasta las elecciones de este año, convencido de que sus resultados la harían irrelevante políticamente. Tanto el presidente Saca como ARENA consideran la negociación como una debilidad. Ceder para obtener algo a cambio, equivale, según ellos, a compartir el poder, lo cual sería una aberración. Por lo tanto, para ellos, la alternativa es el poder absoluto. La imprudencia, a veces, se paga cara. El presidente Saca se encuentra en aprietos serios, tiene menos poder, menos credibilidad y menos autoridad y para gobernar no sólo necesitará del Partido de Conciliación Nacional, sino también del FMLN, su adversario histórico.

[...] el presidente Saca optó por la inmoralidad, al defender que el fin justifica los medios. Presentó la búsqueda del poder total en la Asamblea Legislativa para anular a la oposición como bien absoluto, que justificaba cualquier medio, incluidas la irregularidad y la ilegalidad.

4. Necesidad y urgencia de reformas electorales

El capítulo de las elecciones de marzo no puede cerrarse con un simple dar vuelta a la página para volver a la rutina. Hay varias razones para detenerse a reflexionar en lo sucedido. Las elecciones manifestaron la profundidad de la polarización ideológica del sistema de partidos políticos. La tendencia centrífuga de la competencia electoral, es decir, los votos salen disparados del centro hacia los extremos, se observa con claridad en la concentración de la votación en ARENA y el FMLN, unos 600 mil votos cada uno. En consecuencia, los partidos que se encuentran entre los dos extremos tienen unas posibilidades de crecimiento muy limitadas. Esto significa, por el otro lado, que la polarización sólo puede disminuir si ARENA o el FMLN modifican sus estrategias. Como ambos buscan el poder, la moderación de uno forzaría la del otro. Ahora bien, dado que el cuerpo electoral se aglutina alrededor de las posiciones del centro hacia la derecha, el desafío mayor está del lado del FMLN. Pero para él no es fácil asumir este hecho, porque hasta ahora, cualquier movimiento hacia el centro, aun para captar votos, lo ha interpretado como abandono inaceptable de sus principios revolucionarios. Desde 1992, el FMLN se ha mantenido fiel a estos principios, incluso cuando esa fidelidad lo aleja del caudal más voluminoso de la votación y lo reduce a una oposición irrelevante o inexistente. Aparte que es muy discutible el carácter verdaderamente revolucionario de tales principios.

No hay que perder de vista que, para mucha gente, las elecciones todavía gozan de cierta credibilidad. No son pocos los que desean manifestarse políticamente, porque todavía piensan que su voto es una contribución importante para el régimen democrático. Es evidente que la sociedad salvadoreña se encuentra atrapada por la polarización. La alternativa tradi-

cional, el tercer partido, ha fracasado repetidamente. Otra alternativa era el voto del exterior, pero éste ya se encuentra polarizado. Los dos partidos grandes se encargaron de alinear a los salvadoreños residentes en Estados Unidos, a quienes, por otro lado, les niegan el voto, en el exterior. Sin embargo, existe otra posibilidad, que valdría la pena explorar, el partido regional. Las experiencias de San Miguel y Santa Ana, en las elecciones pasadas, parecieran apuntar hacia una salida que, de ser transitada, podría convertir la situación actual en proceso político.

En efecto, las reelecciones de los alcaldes de Santa Ana y San Miguel, y también de Nejapa, pueden dar pistas para superar la polarización. Los tres triunfos se explican por el peso de los candidatos frente a los partidos. Mientras éstos triunfaban, pese a la oposición de sus respectivos partidos, el FMLN y ARENA perdieron el control de San Miguel y de Santa Ana, la segunda y la tercera ciudad del país. El FMLN también perdió Nejapa, un municipio del área metropolitana. La polarización podría perder terreno ante la conformación de partidos que no compiten en términos de izquierda y derecha, sino de apoyo territorial al candidato. La construcción del puerto de Cutuco y sus consecuencias tendrán implicaciones económicas y sociales importantes en la región oriental, y en particular, en San Miguel y La Unión. Esta región es la que más población ha expulsado al norte y, por lo tanto, la que recibe más ayuda, y también la que absorbe más inmigrantes de los países vecinos, indispensables para llenar el vacío laboral, dejado por los que la abandonaron. Esta configuración social podría

La tarea fundamental de la sociedad organizada es doble, controlar a sus gobernantes, nacionales y locales, y reclamar con fuerza y lucidez la reforma electoral. Está demostrado que no se puede dejar en libertad a los partidos ni tampoco a los políticos, porque hacen mal uso del poder y de los recursos públicos.

ser traducida a términos políticos, en un proceso de descentralización genuino, desde la periferia hacia el centro. La conformación de partidos con fuerza regional podría poner fin al predominio indiscutido de los partidos nacionales y así contribuir a la moderación del espectro político. Candidatos como estos alcaldes reelegidos podrían utilizar su caudal político para constituir fuerzas regionales, desde las cuales incidir en los partidos con dimensión nacional. Esta posibilidad es tan real que no ha pasado desapercibida para dos de ellos.

ARENA y el FMLN no ganaron las elecciones, pero el sistema democrático y la institucionalidad las perdieron. El juego perverso de los dos primeros socavó sus cimientos y deterioró aún más su estructura. Es paradójico que el presidente Saca haya sido el que más contribuyó a erosionar la institucionalidad. En efecto, una de sus cartas favoritas de presentación es la defensa de la misma y la promoción de la gobernabilidad; mientras que el FMLN representaría la amenaza permanente para la estabilidad de ambas. No obstante haber violado la Constitución, aunque no ha sido el único, el Fiscal General no investigará su actuación y aunque lo hiciera, la Corte Suprema de Justicia no se atreverá a declararla inconstitucional. El Tribunal Supremo Electoral desconoce los hechos, mientras que la Asamblea Legislativa no tiene poder para pedirle cuentas. Alegar la práctica de países como Estados Unidos es impropio, porque la Constitución sal-

vadoreña prohíbe al funcionario participar en actividades partidarias o valerse de su cargo para promoverlas. En cuanto Presidente de la República, Saca ostenta la representación de toda la ciudadanía y no puede renunciar a ésta, sin renunciar a aquélla. Además, Saca pidió el voto para él, mientras que los presidentes estadounidenses lo piden para el candidato. Tampoco es admisible la comparación con los jefes de los gobiernos parlamentarios, porque éstos hacen política partidista como jefes de gobierno de su partido. Aun cuando le disguste profundamente, el presidente Saca es presidente de toda la ciudadanía salvadoreña, la cual incluye a los militantes del FMLN. De la misma manera, que debe abstenerse de la política partidaria, más allá de lo ordenado por la Constitución, tampoco debería presentar como un logro de ARENA la extensión de la residencia temporal de los emigrantes salvadoreños en Estados Unidos, porque luchar por ella es una obligación suya como Presidente de la República. Las primeras consecuencias de su aventurerismo electoral están a la vista.

Es tan evidente el deterioro institucional, que los partidos políticos hablan de reforma electoral. Desde la elección de 1994, siempre se habla de reforma *a posteriori*; pero hasta ahora, ésta no ha pasado de propuestas aisladas y de unas cuantas modificaciones superficiales e improvisadas. Todavía no se ha hecho ningún esfuerzo sistemático para hacer una revisión integral de la institución electoral. En esta ocasión, incluso el presidente Saca presentó una propuesta, aparentemente crucial, para despejar las serias dudas que cuestionan la limpieza del proceso recién concluido. La propuesta alargaría los periodos de diputados y alcaldes de tres a cinco años, de tal manera que su elección coincidiera con la del Presidente de la República.

Alargar los periodos para hacer coincidir las tres elecciones no es más que un ardid para desviar la atención de la cuestión de fondo. Una verdadera reforma del sistema debe comenzar por la reforma del Artículo 208 de la Constitución, para lo cual es necesario dar el primer paso antes de que concluya el mandato de la legislatura actual. Este artículo se refiere a la integración del Tribunal Supremo Electoral, el cual debe ser liberado de las ataduras partidistas, ya sea eliminando la representación de los partidos, ya sea aumentando el número de miembros no partidistas, de tal manera que el fiel de la balanza se incline a favor de los últimos. Consecuentemente, también deben eliminarse las cuotas partidistas en la conformación de la burocracia de la institución, la cual debería regirse por un reglamento de la carrera del servicio civil; asimismo, se deben separar sus funciones administrativas y jurisdiccionales; se le debe garantizar autonomía presupuestaria, para evitar el chantaje político de la Asamblea Legislativa, y el mandato de sus magistrados no debiera depender de los resultados de las elecciones. Es preferible reducir el mandato presidencial a cuatro años y alargar el de los diputados y alcaldes también a cuatro años. Así, las tres elecciones coincidirían y el mandato presidencial no sería tan largo. Esta medida favorecería la distensión electoral e implicaría ahorro de recursos humanos y económicos. Pero para ello también hay que modificar la Constitución, cuyo proceso debe comenzar la legislatura saliente.

Hay otras cuestiones como la reducción drástica de la propaganda electoral, la regulación del uso de los medios de comunicación y prensa, la

auditoría pública del financiamiento de los partidos, la independencia del Registro Nacional de Personas Naturales del poder ejecutivo y de cualquier partido, cuya discusión podría esperar, para no desviar la atención y dejar pasar la oportunidad que ofrece el cambio de legislatura. Es evidente que el actual Tribunal Supremo Electoral está agotado. Pero es dudoso que el presidente Saca, el primero en proponer una reforma, y sus colegas estén dispuestos a ir tan lejos, porque, entonces, les sería más difícil maniobrar para obtener ventajas electorales. Una reforma estructural de la institución significa la renuncia voluntaria de los partidos al enorme poder que ahora detentan. A más poder, más ventajas sobre sus adversarios. La renuncia a este poder discrecional es necesariamente voluntaria, porque sólo ellos pueden legislar las modificaciones. Por eso, cuando los políticos y el gobierno de Saca hablan de reformas se refieren más bien a modificaciones parciales y de alcance limitado, con las cuales es imposible construir una institucionalidad electoral sólida, independiente y transparente.

Este panorama desalentador, a primera vista, deja la iniciativa en manos de la sociedad organizada, pues los partidos políticos no van a impulsar, por iniciativa propia, una reforma electoral radical. Las diversas peticiones de reforma, incluidas las de la gran empresa privada, indican la existencia de un consenso social que no puede dejarse pasar sin pagar un costo muy elevado. Si esta legislatura no da los primeros pasos, es poco probable que la posibilidad vuelva a presentarse, al finalizar el mandato de la nueva, en 2009. Además, en ese año, coincidirán las tres elecciones y, por lo tanto, sus resultados determinarán la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral, para el periodo 2009-2014. Ese Tribunal será igual o peor que el actual. Al no aprovechar la coyuntura actual, la posibilidad de una reestructuración institucional deberá aguardar hasta el año 2014.

La tarea fundamental de la sociedad organizada es doble, controlar a sus gobernantes, nacionales y locales, y reclamar con fuerza y lucidez la reforma electoral. Está demostrado que no se puede dejar en libertad a los partidos, ni tampoco a los políticos, porque hacen mal uso del poder y de los recursos públicos. Por eso, la presión es determinante para hacer que los controles institucionales funcionen; pero como estos no son suficientes, estos deben ser reforzados con controles sociales, o bien, crear más controles institucionales. Uno de los puntos clave para controlar al gobierno es la discusión y la supervisión de la ejecución del presupuesto nacional, porque en la asignación de los gastos, en la determinación de los ingresos y del déficit fiscal, así como también en la evaluación concienzuda de la inversión se deciden, más que en las urnas, cuestiones como el empleo, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la vivienda, etc. La gran empresa lo sabe muy bien. Por eso, influye en la política presupuestaria de ARENA. La sociedad organizada también debiera tomar parte en la discusión y presentar sus intereses, pero ni el gobierno, ni ningún partido le va a abrir ese espacio. Por lo tanto, debe conquistarlo socialmente y el medio más directo y eficaz es hacer sentir a los protagonistas actuales, en concreto, a los partidos, que perderán terreno electoral si no acceden a ello.

La ciudadanía se puede hacer oír a través de las encuestas de opinión pública y de los medios de comunicación. De hecho, los diseñadores de las

encuestas y los periodistas y presentadores de los programas de opinión, en la televisión y la radio, son actores políticos que compiten con los partidos por la representación de la opinión ciudadana. Una alianza entre la sociedad organizada, las casas encuestadoras y los medios podría equilibrar el poder social frente al poder político casi total de los partidos y también frente al inmenso poder económico de los grandes empresarios.

Desde esta perspectiva, lo determinante no es acceder a los puestos de elección popular, a través de los partidos, sino controlar a quienes acceden a ellos. El voto otorga legitimidad para asumir determinadas funciones, pero es insuficiente. El funcionario público debe legitimar su desempeño con una gestión eficaz, en beneficio directo de la población. Pero como la eficacia puede ser disfrazada con buena publicidad, la ciudadanía organizada debe evaluar de forma permanente el desempeño de sus gobernantes.

San Salvador, 24 de abril de 2006.